



**Causa FSM 18007/2024/57/CA13, “Legajo N° 57 - SOLICITANTE:** [REDACTED]

██████████”, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N° 1, Secretaría N° 1.

San Martín, 17 de julio de 2025.

**VISTOS Y CONSIDERANDO:**

I.- Llegan las actuaciones a conocimiento del Tribunal, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las defensas de [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED].

[REDACTED], contra el auto que decretó sus procesamientos con prisión preventiva en orden al delito de lavado de activos, doblemente agravado por haber sido cometido con habitualidad, como miembros de una asociación-banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza y por la intervención de funcionarios públicos que habrían cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En el caso de [REDACTED] [REDACTED], además, por haber actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requiere habilitación especial (Conf. Arts. 45, 303, Inc. 1° -agravado por el Inc. 2° "a" y "b"- del CP, según redacción de la ley 26.683; 306 y 312 del CPPN).

A su vez, en tanto decretó los procesamientos de [REDACTED] [REDACTED], en orden a los ilícitos de balance falso -en grado de coautores los dos primeros y partícipe primario el último- y uso de instrumento privado falso -en carácter de partícipes necesarios-, los cuales



concurren materialmente entre sí y con aquel sindicado en el párrafo precedente (Arts. 45, 292, 1° párrafo -en función del 296- y 300, Inc. 2°, del CP).

Por su parte, en cuanto decretó el procesamiento de [REDACTED] como partícipe necesario del delito de uso de instrumento privado falso, que concurre realmente con el lavado de activos (Art. 292, 1° párrafo -en función del 296- del CP).

Por último, la asistencia técnica de "[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] apeló el procesamiento de éstas por la presunta intervención en la comisión del delito de lavado de activos.

Cabe señalar que, a su vez, todas las defensas recurrieron la traba del embargo dispuesta sobre los bienes y dinero de sus asistidos.

**II.-** En la instancia, las defensas de [REDACTED]  
[REDACTED] y **las personas jurídicas**, mantuvieron sus recursos mediante la presentación de memoriales.

En tanto, las de [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED], comparecieron a la audiencia oral fijada en los términos del Art. 454 del CPPN.

**III.- De los agravios comunes y preliminares.**

Las defensas aludieron a la arbitrariedad del auto de mérito.



## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL N° 3

**Causa FSM 18007/2024/57/CA13, "Legajo N° 57 - SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO: [REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N° 1, Secretaría N° 1.**  
**Registro de Cámara: 11.523**

Al respecto, cabe señalar que el Art. 123 del CPPN demanda que los autos deben estar motivados, a la par que el Máximo Tribunal ha calificado arbitrario a todo aquel que carece de fundamentación (Fallos: 329:4663); que sujeta el hecho al derecho sin constituir una derivación razonada del ordenamiento jurídico (Fallos: 330:1465); que no constituye una deducción lógica del derecho vigente con aplicación a los hechos comprobados en la causa (Fallos: 310:2091); que omite tratar cuestiones oportunamente propuestas y conducentes para la concreta solución del pleito, si tal omisión importa un desmedro del derecho de defensa (del dictamen del Procurador General de la Nación al que remitió la CSJN en Fallos: 329:3048; y 323:2839); que entra en contradicción con lo que surge racional y objetivamente de la valoración en conjunto de las diversas pruebas, indicios y presunciones que constan en el expediente (Fallos: 319:1728); y que omite la ponderación colegida de las pruebas producidas y constituye una formulación dogmática (Fallos: 319:722); entre otras causales.

Es criterio de la Sala, que la exigencia de motivación y fundamentación de las decisiones judiciales observa las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso (Arts. 18 de la CN, 8 CADH, 14 PIDCP, 9 y 11 DUDH y 26 DADDDH; y Secretaría Penal N° 3, FSM 3084/2020/35/CA7, Rta. el 04/12/2024, Reg. N° 11.274; entre muchos otros), en la medida que exterioriza las razones de los jueces para dictar sus pronunciamientos, tanto en los aspectos fácticos como jurídicos, porque los obliga a desarrollar sus reflexiones para arribar a la decisión de una manera clara,

Fecha de firma: 17/07/2025

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS, SECRETARIO DE CAMARA



#39940434#464304006#20250717131518751

completa, coordinada entre los distintos argumentos y entre éstos y las resoluciones, apoyado en los hechos probados en el expediente y en la ley vigente, que dan base a su juicio, todo lo cual valorado racionalmente, de modo que establezca la lógica de la solución del conflicto (JAUCHEN, Eduardo, "Tratado de Derecho Procesal Penal", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2012, T. II, Págs. 20-22; D'ALBORA, Francisco J., "Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado", 7ma. edición, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005, T. I, Págs. 262-263; y CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., "Tratado de Derecho Procesal", Ediar, Buenos Aires, 1964, T. IV, P. 295).

En el caso concreto, el Tribunal advierte que la decisión jurisdiccional reúne las exigencias del Art. 123 del CPPN, en tanto estuvo fundamentada y motivada en los hechos comprobados en el expediente, y se valoraron los indicios de manera conjunta, para arribar al grado de certeza requerido para la etapa procesal, adecuándolos a la ley penal vigente, exteriorizando un razonamiento lógico que unió sus consideraciones con sus resoluciones. A tal punto, que las partes pudieron ejercer su derecho de defensa en juicio, introduciendo los agravios específicos contra el pronunciamiento, por lo que la arbitrariedad invocada se presenta como una mera disconformidad con lo resuelto.

Por lo demás, con relación a las críticas acerca del mérito de los elementos de convicción agregados al sumario, corresponde traer a colación lo expuesto en otros decisorios, en cuanto a cómo han de valorarse los diferentes elementos probatorios que se encuentran en el expediente. Se ha dicho que el juez puede inclinarse y darle preponderancia





## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL N° 3

Causa **FSM 18007/2024/57/CA13**, "Legajo N° 57 -  
SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO:  
[REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE  
APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro N° 1, Secretaría N° 1.  
**Registro de Cámara: 11.523**

a aquellos que le merecen mayor fe, en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el legajo, puesto que resulta una facultad privativa y discrecional del magistrado.

En esa dirección, no está obligado a seguir a las partes en todas las argumentaciones que le presenten, ni a examinar cada una de las probanzas aportadas a la causa, sino sólo las pertinentes para resolver lo planteado (Fallos: 258:304; 262:222; 272:225 y 278:271; entre otros).

Así, la valoración de la prueba debe ser realizada conforme a las previsiones de la sana crítica racional, que presupone la libre valoración de los elementos producidos y de escoger los medios probatorios para verificar el hecho, en la medida que la apreciación de las probanzas y el consecuente fundamento de la decisión jurisdiccional se fundamenten en el razonamiento sustentado en los principios de la lógica, la experiencia común, la psicología y el recto entendimiento humano (JAUCHEN, Págs. 22 y 718-719; MAIER, Julio B.J., "Derecho Procesal Penal", Fundamentos, 2° edición, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004, T. I, P. 871; Fallos: 341:1237; y esta Sala, Secretaría Penal N° 1, FCB 7969/2017/12/CA1 -13.012-, "Jorquera, Sergio Gabriel y otros s/legajo de apelación", Reg. N° 11 .914, Rta. el 28/3/2019, entre muchos otros).

Por otra parte, corresponde aclarar que la instancia del proceso que actualmente se transita no requiere certeza de culpabilidad; es decir, no exige que la valoración que se realice sobre la prueba lleve inequívocamente a una única resolución sobre la

Fecha de firma: 17/07/2025

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS, SECRETARIO DE CAMARA



#39940434#464304006#20250717131518751

responsabilidad de los autores en el hecho. Para esta etapa, basta la convicción suficiente de que existe probabilidad de que los imputados han cometido los delitos imputados (JAUCHEN, Eduardo M., "Derechos del imputado", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2007, Págs. 108-109).

Conforme lo expuesto, es criterio de la Sala que los indicios aisladamente configuran un hecho o circunstancia accesoria, que adquiere relevancia al advertirse que tiene conexión con otros. Para analizar dichos vínculos, habrá de valorarse la prueba indiciaria en forma general, ya que la incertidumbre que pueda caber mediante el análisis aislado de cada uno, podrá superarse a través de la evaluación conjunta (MITTERMAIER, Karl Joseph Anton, "Tratado de la prueba en materia criminal", traducción de GONZÁLEZ DEL ALBA, Primitivo, Fabián K. Di Plácido Editor, Buenos Aires, 1999, Págs. 447-448; HAIRABEDIÁN Maximiliano, "La prueba en el proceso penal", 6° edición, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2008, Págs. 218 -222; y esta Sala, Secretaría Penal N° 1, FSM 62281/2016/20/CA1-13.020-, "Lucioni, Carlos Omar y otro s/ legajo de apelación", Reg. N° 11.838, Rta. el 31/1/2019, entre muchos otros).

Por ello, es función del juzgador desentrañar el circuito mendaz, valorando como ciertos solo aquellos elementos que, a partir de la prueba colectada y sana crítica mediante, considere veraces, descartando, en cambio, los que se evidencien como ardides para enmascarar las actividades reales.





## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL N° 3

Causa **FSM 18007/2024/57/CA13**, "Legajo N° 57 -  
SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO:  
[REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE  
APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro N° 1, Secretaría N° 1.  
**Registro de Cámara: 11.523**

En esa senda y, con base en los hechos que conforman la plataforma fáctica de este legajo, cabe traer a colación lo sostenido por la Cámara Federal de Casación Penal en el precedente "Sánchez, Pedro Norberto", en punto a que, dadas las particularidades que presenta el delito de lavado de activos, muchas veces resulta dificultoso arribar a una reconstrucción histórica precisa y exhaustiva del derrotero que siguieron los bienes desde el momento en que fueron obtenidos de manera ilegal, hasta que finalmente se los aplicó en alguna operación propia del delito de blanqueo de capitales. De ahí, que la prueba de indicios sea especialmente idónea y útil para suplir la carencia de la prueba directa y evitar, así, las parcelas de impunidad que podrían generarse (Sala III, causa 1313/2013, Reg. N° 2377/14, del 11/11/2014).

En definitiva, bajo las premisas enunciadas, es que habrá de abordarse el tratamiento de la prueba colectada y las quejas formuladas.

### IV.- Del inicio de la causa y los hechos atribuidos

.  
El sumario tuvo inicio el 2 de julio de 2024, a partir de la denuncia presentada por el periodista Christian Eduardo Sanz contra el entonces Senador Nacional Edgardo [REDACTED] por la posible comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de lo que fue anoticiado como una compleja trama de delincuencia económica organizada y corrupción pública.



El avance de la investigación y la detención del nombrado en el contexto de los hechos que son de público conocimiento, motorizó distintas diligencias probatorias que involucraron allanamientos, secuestros de documentación y detenciones respecto de, en cuanto aquí importa puntualizar, José Carlos [REDACTED] Gabriela Patricia Saint Pierre, Ernesto Javier Rubel, Rodolfo Daniel González, Adriana Cecilia Crucitta, Ezequiel Gustavo Bovetti y Rita Soledad Machuca, como en relación a las personas jurídicas "Nopor Service SA", "[REDACTED] SA", "VÍA SNP LOGÍSTICA SA", "FELSIR BIOTECNOLOGÍA SRL" y "Vijusa Industrial Argentina SA", cuyas situaciones procesales son traídas a revisión de esta Cámara.

Ahora bien, para dar debida respuesta a los múltiples agravios introducidos por las defensas, deviene pertinente, en primer lugar, hacer mención a las acciones típicas de lavado de activos que se tienen por acreditadas en el auto recurrido, respecto de los mencionados causantes, conforme la siguiente estructura:

**a.- Maniobras de conversión y aplicación de activos, a efectos de ocultar su procedencia ilícita, mediante la adquisición de bienes inmuebles y vehículos automotores.**

Afirma la magistrada -con remisión al dictamen del fiscal interviniente- que: "Se investiga a Edgardo Darío [REDACTED] Iara GUINSEL COSTA, Ernesto Javier RUBEL, Rodolfo Daniel GONZÁLEZ, José Carlos [REDACTED] Gabriela Patricia SAINT PIERRE, Ezequiel BOVETTI, Adriana CRUCITTA, Débora FERREYRA y Rita MACHUCA, con la intervención como fachada de







## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL N° 3

Causa **FSM 18007/2024/57/CA13**, "Legajo N° 57 -  
SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO:  
[REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE  
APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro N° 1, Secretaría N° 1.  
**Registro de Cámara: 11.523**

la sociedad anónima denominada [REDACTED] que tuvo por accionistas y directivos a [REDACTED] SAINT PIERRE, RUBEL y GONZALEZ, y como asesores contables a [REDACTED] BOVETTI y FERREYRA, por ocultar la procedencia y así otorgar apariencia lícita a activos que prima facie tendrían como delitos precedentes el cohecho (arts. 256 y 258 C.P.), negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265 C.P.) y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 C.P.)".

Agregó que: "La maniobra se concretó mediante sucesivas operaciones inmobiliarias, realizadas entre el 24 de marzo de 2021 y el 9 de agosto de 2023, por la suma de, al menos, \$41.149.659,28 (USD 152.106 a la época de la cancelación de los pagos) de procedencia ilícita, mediante las cuales se adquirieron a la desarrolladora inmobiliaria CADUS SAS las unidades funcionales nros. 12, 14, 46, 47 y 72 del edificio sito en la calle Santiago del Estero n° 511, Paraná, Provincia de Entre Ríos. Las mismas se ejecutaron utilizando como pantalla a la persona jurídica [REDACTED] configurándose así la acción típica de disimular y convertir (cambio de un bien obtenido de la comisión de un delito por otro de naturaleza distinta) prevista en el art. 303 del Código Penal. Asimismo, se destaca que, al menos a partir de junio de 2024, Iara GUINSEL COSTA se presentó como titular de aquellos inmuebles ante la administración del edificio, abonando las expensas a través de transferencias bancarias desde la Caja de ahorro en pesos 068-40-337148/4 del BBVA a su nombre, que era fondeada, entre otros, por Edgardo

Fecha de firma: 17/07/2025

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS, SECRETARIO DE CAMARA



#39940434#464304006#20250717131518751

██████████ Rodolfo Daniel González y la firma Peninsular Sudamericana SAS (González y Crucitta), con el propósito de ocultar la verdadera titularidad de dichos bienes y ejercer el carácter de administradora de los mismos. Mientras que al menos desde el 3 de octubre de 2023, Rita MACHUCA, bajo el amparo de un contrato de comodato a título gratuito otorgado por ██████████ S.A., administró los servicios de los inmuebles en cuestión. Por otra parte, a los fines de continuar ocultando el origen espurio y simular una apariencia lícita de los activos utilizados para adquirir estos bienes inmuebles, esta vez ante un requerimiento por inconsistencias efectuado por el organismo recaudador nacional, con fecha 5 de diciembre de 2022 los representantes de esa firma (RUBEL y Débora FERREYRA), con la intención de justificar parte del dinero ingresado en las cuentas bancarias de ██████████ alegaron, en una maniobra articulada con ██████████ ██████████ BOVETTI y GONZALEZ, la existencia de dos préstamos de dinero. Así, argumentaron que dichos empréstitos fueron primigeniamente gestionados para un proyecto destinado a la elaboración de fertilizantes en el marco de la firma ██████████ que al no concretarse finalmente se aplicó para la adquisición de las propiedades bajo análisis. A fin de concretar esta nueva maniobra de ocultamiento, documentaron falsamente ante el organismo recaudador la recepción de un préstamo de \$ 3.000.000 concedido por la firma Estructuras Financieras Regionales S.A. a Rodolfo Daniel GONZALEZ, presidente de ██████████ con fecha 13 de noviembre de 2019. Asimismo, también aportaron documentación para simular otro préstamo de \$3.780.000

---

Fecha de firma: 17/07/2025

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS, SECRETARIO DE CAMARA



#39940434#464304006#20250717131518751



## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL Nº 3

Causa FSM 18007/2024/57/CA13, "Legajo Nº 57 - SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO: [REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro Nº 1, Secretaría Nº 1.  
Registro de Cámara: 11.523

otorgado por la firma Estructuras Financieras Regionales S.A. a Ernesto Javier RUBEL, presidente de [REDACTED] con fecha 30 de abril de 2020".

De su lado, mencionó que: "otra conducta que es objeto de esta pesquisa se concretó con fecha 17 de agosto de 2021, oportunidad en la que Edgardo Darío [REDACTED] adquirió, mediante \$5.705.956,39 (USD 31.180 a esa fecha) de origen espurio, la camioneta Chevrolet Trailblazer dominio AE7970J, a la agencia de autos RUDAS, con la intervención de la concesionaria HCH S.A, a través de la persona interpuesta de Rodolfo Daniel GONZALEZ, con la colaboración del contador José Carlos [REDACTED] a fin de ocultar el origen delictivo de aquellos activos convertidos y aplicados mediante dicha operación. Aquel vehículo contaba con cédula autorizando su conducción a Iara Magdalena GUINSEL COSTA, Edgardo [REDACTED] y Liliana Rosa DI LELLO".

### **b.- Colocación y puesta en circulación de activos de origen ilícito en el sistema financiero local.**

Sostiene la jueza —con remisión al dictamen del fiscal interviniente—, que: "Asimismo, se tiene, hasta la fecha, que a través de la fachada de la compañía [REDACTED] S.A., y mediante la activa intervención de Edgardo Darío [REDACTED] Ernesto Javier RUBEL, Rodolfo Daniel GONZALEZ, José Carlos [REDACTED] Gabriela Patricia SAINT PIERRE, Ezequiel BOVETTI, y las firmas NOPOR SERVICE SA (CUIT 30715151010), [REDACTED] SA (CUIT 30686512912), VIA SNP LOGISTICA SA (CUIT 30715894579), FELSIR BIOTECNOLOGIA SRL (CUIT 3071142258),



VIJUSA INDUSTRIAL ARGENTINA (30714088994), se colocaron y pusieron en circulación en el sistema financiero local, durante al menos el 1 de marzo de 2019 al 15 de agosto de 2024 dinero proveniente de un ilícito en las cuentas bancarias 03778813-002 (\$ 8.586.827) y 03778813-001 (USD 26.011) abiertas por dicha sociedad en el Banco Supervielle, y así ocultaron su procedencia ilícita”.

**c.- Transferencia de bienes subrogados.**

Sobre el particular, afirmó que: “La conducta se concretó con la intervención de, al menos, Javier RUBEL, Rodolfo Daniel GONZALEZ, José Carlos [REDACTED] Ezequiel BOVETTI, con fecha incierta, pero entre el 31 de octubre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, oportunidad en la cual se simuló una cesión de boleto de compraventa y rescisión de un contrato de mutuo, entre Rodolfo Daniel González y Ernesto Javier Rubel. Del mismo surge que con fecha 20 de diciembre de 2020 se celebró un mutuo por \$30.000.000 y USD 200.000 de González a [REDACTED] que entregó 4 pagarés. Que a la fecha de celebración de la supuesta cesión la deuda asciende a USD 430.325 y que, a los efectos de cancelar el mutuo, que aquí se reputa falso, resuelven la cesión de boletos de compraventa de unidades funcionales del edificio ubicado en Santiago del Estero n. 511 y 517, Paraná”.

Con sustento en esa plataforma fáctica, afirma la jueza de grado que se investiga en autos a una asociación o banda, conformada, al menos, por Edgardo Darío [REDACTED] Iara Guinsel Costa, Ernesto Javier Rubel, Rodolfo Daniel





## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL Nº 3

Causa **FSM 18007/2024/57/CA13**, "Legajo Nº 57 -  
SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO:  
[REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE  
APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro Nº 1, Secretaría Nº 1.  
**Registro de Cámara: 11.523**

González, José Carlos [REDACTED] Gabriela Patricia Saint  
Pierre, Ezequiel Bovetti, Adriana Crucitta, Débora Ferreyra  
y Rita Machuca, con más la intervención de las firmas  
"[REDACTED] SA", "NOPOR SERVICE SA", "[REDACTED] SA", "VIA SNP  
LOGISTICA SA", "FELSIR BIOTECNOLOGIA SRL" y "VIJUSA  
INDUSTRIAL ARGENTINA", destinada a concretar, con  
habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras,  
a través de la colocación y puesta en circulación en el  
sistema financiero, así como también en la conversión  
mediante la adquisición de bienes inmuebles (y su posterior  
transferencia) y muebles -durante el período comprendido, en  
principio, desde el 1º de marzo de 2019 hasta el dictado del  
pronunciamiento- con la finalidad de otorgarle apariencia de  
origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal  
(cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de  
funciones públicas y violación de los deberes de funcionario  
público). Ello, valiéndose algunos de los miembros de su  
especial condición de funcionarios públicos en el ejercicio  
y/o en ocasión de sus funciones ([REDACTED] Guinsel Costa,  
González y Crucitta) y personas que actuaron en ejercicio de  
una profesión que requiere habilitación especial (contadores  
[REDACTED] y Bovetti).

Por su parte, y siempre con remisión a la  
imputación formulada por el Ministerio Público Fiscal, el  
pronunciamiento alude al delito de balance falso (Art. 300,  
Inc. 2º, del CP), por haberse consignado y asentado  
información falsa en los balances de la firma "[REDACTED] SA"  
-comportamiento que se atribuye en coautoría, en cuanto aquí  
importa puntualizar, a Javier Ernesto Rubel y a José

Fecha de firma: 17/07/2025

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS, SECRETARIO DE CAMARA



#39940434#464304006#20250717131518751

██████████ con la participación necesaria de Ezequiel Bovetti y Débora Ferreyra (cuyo procesamiento obra firme)– por los ejercicios finalizados el 30 de septiembre de 2021 y 30 de septiembre de 2022, vinculada a deudas ficticias contraídas con la firma “Estructuras Financieras SA” y préstamos de socios, a la vez que inversiones de \$20.000.000 en el “Fideicomiso Santiago Tejeiro”, que en rigor correspondían, según se sostiene, al patrimonio personal de ██████████ distorsionando la real situación económica de la empresa ante la entidad bancaria en la que operaba y el organismo recaudador nacional.

Como consecuencia de lo expuesto, se afirmó que en el marco de la fiscalización externa realizada por la Dirección Regional Oeste de la ex AFIP al contribuyente “██████████ SA” –con fecha 5 de diciembre de 2022– Débora Ferreyra, con la intervención necesaria de, en cuanto aquí importa, Rubel, González, ██████████ y Bovetti, hicieron uso de documentos privados falsos, que daban cuenta de supuestos préstamos concedidos los días 13 de noviembre de 2019 y 30 de abril de 2020 por la firma “Estructuras Financieras” a las autoridades de la sociedad “██████████ SA” (González y Rubel, respectivamente), perjudicando los intereses del organismo recaudador nacional.

Luego, en lo medular, sostuvo la magistrada que los delitos precedentes encuentran apoyo en las maniobras delictivas del “Grupo SECURITAS” con funcionarios de la empresa estatal “ENERSA” y su vinculación con Edgardo Darío





## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL N° 3

Causa FSM 18007/2024/57/CA13, "Legajo N° 57 -  
SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO:  
[REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE  
APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro N° 1, Secretaría N° 1.  
Registro de Cámara: 11.523

[REDACTED] como así también, en los registros filmicos que ilustran la recepción y entrega de grandes sumas de dinero en efectivo.

### V.- Del delito precedente.

Previo al tratamiento de la situación procesal de los imputados en particular, corresponde destacar que, ciertas defensas, sostuvieron que carece de sustancia la relación del delito de lavado de activos reprochado con los eventos investigados en la causa FSM 3084/2020, ya que, en lo sustancial y, según afirman, o bien Edgardo Darío [REDACTED] no se encuentra imputado en ella o bien no se encuentra establecido el origen de los fondos presuntamente lavados.

A fin de abordar adecuadamente la cuestión, deviene necesario realizar algunas consideraciones sobre la referida figura.

El Art. 303, Inc. 1, del CP –conforme ley 26.683–, en lo que aquí interesa, prevé que: "*Será reprimido (...) el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito...*".

Nótese que la actual legislación del delito, aún con la reforma introducida en 2024 por la ley N° 27.739, determina que el hecho anterior debe ser un ilícito penal; expresión que reemplazó a la de delito, propia de la ley N° 25.246, cuando el lavado de dinero se encontraba tipificado

Fecha de firma: 17/07/2025

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS, SECRETARIO DE CAMARA



#39940434#464304006#20250717131518751

en el Art. 278 del digesto sustantivo, entre los delitos contra la administración pública.

Dicha modificación técnica introducida por el legislador, desde la óptica de la teoría del delito, despeja cualquier interrogante sobre el hecho precedente.

Así, el suceso anterior del cual provienen los bienes que se pretenden lavar, basta que haya sido típico y antijurídico; es decir, un injusto penal (aspecto que descarta, por ejemplo, las contravenciones e infracciones administrativas), desplazando de esta manera, a la culpabilidad de ese hecho anterior como requisito para que pueda configurarse el posterior.

En consecuencia, la normativa no reclama la culpabilidad y punibilidad del autor del evento previo, *"...cerrando así la posibilidad de cualquier interpretación alternativa por la que se pretendiera exigir algo más que la tipicidad y la antijuricidad del hecho precedente"* (CÓRDOBA, Fernando J., "Delito de Lavado de Dinero", Hammurabi, Buenos Aires, 2019, Pág. 137).

Ahora bien, el hecho ilícito del cual provendrían los bienes, no es el objeto del proceso en el que se investiga la maniobra de lavado. Por ello, deviene suficiente que se puedan demostrar las circunstancias por las que, de manera indiciaria, se considera que su origen se corresponde con la existencia y comisión de un accionar ilegal cometido con anterioridad a aquél.

De ese modo, la procedencia espuria de los fondos objeto de la maniobra, constituye la pauta de examen en términos de injusto que ha de primar para el juzgamiento del







## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL Nº 3

Causa FSM 18007/2024/57/CA13, "Legajo Nº 57 - SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO: [REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro Nº 1, Secretaría Nº 1.  
Registro de Cámara: 11.523

lavado, que se advierte autónomo en relación con el concreto estudio y sanción de los hechos constitutivos del delito precedente.

A su vez, mediante la reforma introducida por la ley Nº 26.683, el legislador argentino (ampliando incluso lo estandarizado por el GAFI en su recomendación número 3, en cuanto indica incluir a "todos los delitos graves") adoptó el sistema de *numerus apertus*, que —como se expuso— alude genéricamente a ilícito penal sin especificar cada uno de los hechos que constituyen delito precedente. Ello determina que el hecho anterior de lavado puede ser cualquiera.

En tal sentido, no puede soslayarse que, para acreditar el delito precedente y su enlace con el consecuente, la prueba de indicios es especialmente idónea y útil para suplir la carencia de prueba directa y, así, como se dijo, evitar las parcelas de impunidad que podrían generarse. Además, corresponde señalar que los indicios más determinantes consisten en: el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que, por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo, pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias; la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial; la comprobación de una actividad delictiva previa de modo genérico que permita el desplazamiento de otros orígenes posibles, sin que sea necesario la demostración plena de un acto delictivo específico, ni de sus intervinientes (Cfme.

Fecha de firma: 17/07/2025

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS, SECRETARIO DE CAMARA



#39940434#464304006#20250717131518751

esta Sala, Secretaría Penal N° 1, FSM 45/2017/14, "CORVO DOLCET, Mateo y otros s/Inf. Art. 303 del Código Penal", Reg. N° 11386, del 18/04/2018).

Entonces, analizado el caso traído a revisión a la luz de tales premisas, nos encontramos con dos cuestiones que merecen ser destacadas.

Por un lado, amén del trámite que registre posteriormente la causa FSM 3084/2020 y del desenlace que pudiera verificarse allí respecto de la situación procesal de Edgardo Darío [REDACTED] por el momento, los indicios ponderados para sustentar la ligazón de las maniobras investigadas en este expediente con, cuanto menos, el evento identificado en aquel legajo como "Caso ENERSA", se aprecian correctamente valorados por la jueza de grado, acorde a las reglas de la sana crítica racional.

En consecuencia, habrán de desestimarse las críticas que presentaron las defensas respecto de esa vinculación con sustento en que, en lo medular, Edgardo Darío [REDACTED] no se encontraría imputado en la primera.

Con relación a esto último, es menester agregar que, sin perjuicio de lo que sostienen los recurrentes, en los exhortos oportunamente librados a las autoridades de la República del Paraguay, se hizo expresa alusión a la presunta vinculación del nombrado con los eventos ventilados en el legajo acumulado.

Sin embargo, por otro lado, no obstante lo expuesto por la a quo en punto al "Caso ENERSA", la Sala tampoco puede soslayar la existencia de otros parámetros que deben de igual modo ser atendidos sobre el origen posible de





## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL N° 3

Causa FSM 18007/2024/57/CA13, "Legajo N° 57 - SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO: [REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N° 1, Secretaría N° 1.  
Registro de Cámara: 11.523

los fondos ilícitos involucrados en autos, que exceden la conexión a la que alude la magistrada.

Es que, tal como fuera introducido desde el inicio de esta investigación, su objeto procesal comprende también la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito (Art. 268 del CP), en el que podría eventualmente hallarse inmerso, cuanto menos, el mentado [REDACTED] en su pretérito carácter de funcionario público (Cfme. requerimiento fiscal de instrucción de Fs. digitales 9/10 del principal).

A este último respecto, corresponde a su vez ponderar la existencia de otro expediente, actualmente radicado ante las autoridades judiciales locales de la ciudad de Concordia, incoado contra el nombrado –entre otros– por la posible comisión del mismo delito, en un período comprendido entre los años 1999 y 2024 (Fs. 125 del cuerpo 1 digitalizado obrante en el principal, y nota actuarial precedente); cuestión que motivara que la jueza de grado solicitara, oportunamente, la inhibitoria al juez de garantías que interviene en aquél.

Entonces, todo lo expuesto hasta aquí, resulta suficiente para tener por configurado el requisito de *delito precedente*, no obstante las consideraciones vertidas por las partes sobre el origen de los fondos vinculados a las video-filmaciones habidas en el domicilio del nombrado.

### VI.- De las situaciones procesales.

A fin de dotar de claridad expositiva a este pronunciamiento, en función de los distintos imputados procesados y la multiplicidad de quejas introducidas por las

Fecha de firma: 17/07/2025

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS, SECRETARIO DE CAMARA



#39940434#464304006#20250717131518751

defensas actuantes, el análisis se habrá de diseccionar en bloques, según la asistencia técnica interviniente, análisis lógico presentado y prueba común, dando respuesta, en orden, a cada uno de los agravios expuestos.

**a.- De la situación procesal de José Carlos [REDACTED] Gabriela Patricia Saint Pierre, "Nopor Service SA", "[REDACTED] SA", "Vía SNP Logística SA", "Felsir Biotecnología SRL" y "Vijusa Industrial Argentina SA".**

En primer lugar, la defensa de las mentadas personas físicas y jurídicas se queja de lo que considera una indebida acumulación jurídica entre la presente y la causa FSM 3084/2020.

Para sustentar esa afirmación, sostiene que no existe razón para la aplicación de la ley 27.401 en autos, ya que la norma sólo resulta aplicable a los hechos sometidos al acuerdo de colaboración eficaz entre la persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, lo que —afirma— no se dio en ninguno de los eventos aquí ventilados.

Al respecto, sin abrir juicio alguno sobre los motivos de la decisión, a la luz del específico agravio que introduce la parte con apoyatura en la ley 27.401, debe decirse que no se advierte cuál es, procesalmente, el óbice para acumular ambos procesos; sobre lo cual, la recurrente nada dice. Tampoco se advierte explicitado el motivo por el cual dicha acumulación repercute en la decisión de mérito que aquí se trae a revisión. Así, sin más, corresponde desechar la queja.





## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL Nº 3

Causa **FSM 18007/2024/57/CA13**, "Legajo Nº 57 -  
SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO:  
[REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE  
APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro Nº 1, Secretaría Nº 1.  
**Registro de Cámara: 11.523**

Luego, esboza una crítica a la estructura de las conductas típicas precisadas por la jueza de grado -Cfme. detalle vertido en el considerando IV-.

En tal sentido, considera que la simulación de boletos de compra-venta es, en realidad, posterior a la consumación de los hechos vinculados a las operaciones inmobiliarias cuestionadas por la instrucción y, en consecuencia, resulta un "hecho postconsumatorio" o un caso de auto-encubrimiento que no puede ser deslindado de aquellas operaciones. De lo expuesto, deduce que se verifica una "indebida duplicación de hechos".

Idéntica "multiplicación", según aduce, sucede con aquello atinente a la defensa realizada ante la "ARCA", pues "la presentación de cualquier documento ante la ARCA (ex AFIP) en defensa de una fiscalización nunca puede considerarse una maniobra ilícita en sí misma sino que debe ser analizada en el contexto del derecho de defensa".

En este sentido, afirma que no puede subsumirse la conducta de [REDACTED] como partícipe necesario del uso de documento privado falso, cuando la sanción recae sobre aquel que efectivamente usa el documento.

Sobre el particular, corresponde hacer notar que los agravios, así presentados, desatienden la plataforma fáctica que se tiene por acreditada.

En efecto, no se advierte duplicación o multiplicación de hechos, sino, por el contrario, distintos tramos de eventos que aparecen especialmente interconectados entre sí.

Fecha de firma: 17/07/2025

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS, SECRETARIO DE CAMARA



#39940434#464304006#20250717131518751

Vale decir, lo que se verifica no es, ni más ni menos, que un natural correlato fáctico y cronológico de una maniobra delictual global, emprendida por la empresa criminal.

A este respecto, debe traerse a colación la fotografía hallada en uno de los celulares de [REDACTED] (descripción N° 11), que exhibe la pantalla de una computadora con menciones escalonadas de distintos actos, insertos de modo consecutivo, vinculados con cada uno de los tramos de eventos reprochados (Vgr.: febrero 2021: mutuo Rubel/[REDACTED] USD 20.000+USD 60.000 DG/[REDACTED] para futura compra; junio 2022: préstamo DG con [REDACTED] por USD300.000 para aumentar valor; entre tantos otros); imagen que resulta demostrativa de la detallada preparación de las maniobras ilícitas atribuidas.

En ese contexto, mal podría entenderse comprendida dentro del derecho de defensa ante el ente recaudador, la presentación de documentos falsos dando cuenta de préstamos inexistentes concedidos a la firma "[REDACTED] SA".

Por lo demás, sobre la afirmación de que no puede responsabilizarse a [REDACTED] por el uso de instrumentos falsos como partícipe necesario, las circunstancias apuntadas por la a quo y su atribuido rol de contador en la organización, despeja cualquier incertidumbre que pueda suscitarse.

Con relación al mentado causante, por otra parte, entiende su defensa que se ha descontextualizado





## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL Nº 3

Causa **FSM 18007/2024/57/CA13**, "Legajo Nº 57 -  
SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO:  
[REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE  
APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro Nº 1, Secretaría Nº 1.  
**Registro de Cámara: 11.523**

indebidamente su rol, el que no excedió el de un cliente de  
"[REDACTED] SA" para la compra de productos y el de un asesor  
contable externo.

Respecto de esto último, destaca que, si los  
balances de la firma son ficticios, la documentación del  
fideicomiso "Live" de la provincia de Entre Ríos también lo  
es, pues reflejan idéntica información sobre los boletos de  
compraventa cuestionados. Entonces, se pregunta el motivo  
por el cual los miembros del fideicomiso son testigos y su  
asistido imputado de balance falso.

De momento, la respuesta al interrogante  
introducido, cuanto menos respecto del causante, surge a las  
claras.

Si hay un denominador común en las defensas  
ensayadas por [REDACTED] es la pretensión de situarse como un  
tercero espectador de todo aquello cuanto realizaban otros  
coencausados, procurando limitar su actuación al específico  
rol de profesional contable que desempeñaba.

Sin embargo, como se advierte, excedió ampliamente  
esos límites funcionales de la profesión.

En primer lugar, no se explica cómo, siendo asesor  
contable de —en cuanto aquí importa puntualizar— la empresa  
"[REDACTED] SA", reconoció estar en conocimiento de que ésta  
carecía de funcionamiento y, en paralelo, se haya acreditado  
que el 90% del flujo de ingresos en la cuenta bancaria de  
esa misma firma sin facturación corresponda a empresas del  
propio [REDACTED]

En este sentido, las explicaciones dadas por el  
nocente confrontan las reglas de la lógica.

Fecha de firma: 17/07/2025

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS, SECRETARIO DE CAMARA



#39940434#464304006#20250717131518751

Al respecto, realizó un extenso relato procurando justificar las transferencias de dinero a la cuenta de "██████ SA".

En lo medular, aludió a la compra de bidones de alcohol en gel para satisfacer la demanda de su empresa "Felsir Biotecnología"; evento que situó en el contexto de la pandemia por coronavirus, con mención específica a los meses de abril y mayo de 2020.

Explicó que el coencausado González —quien lo ayudaba a promocionar productos a cambio de una comisión por venta, que se abonaba en negro—, a través de un proveedor que estaría relacionado con ██████ y que no identificó, le consiguió 1.500 bidones de alcohol en gel. Dijo que esa operación fue saldada, a pedido de González, con giros a la cuenta corriente de "██████ SA" desde sus distintas empresas. Aportó, en presunto aval de sus dichos, una factura proforma con los detalles de la operación que obraría firmada por el imputado Javier Rubel, presidente de esta última compañía.

Ahora bien, al momento de ponderar el descargo y la queja introducida por la defensa, en consonancia con lo sostenido por la instancia de origen, se advierten distintos giros de dinero producidos en un corto período de tiempo y emanados de distintas empresas del justiciable y Gabriela Saint Pierre —20/02/20, 30/04/20, 6, 7, 8, 11 y 12/05/20, hasta alcanzar un total de \$ 3.788.080—, que no parecieran condecirse con una operatoria comercial habitual de las relatadas por el imputado. Máxime cuando, según él mismo sostuvo, los montos transferidos giraron sobre la







## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL N° 3

Causa FSM 18007/2024/57/CA13, "Legajo N° 57 -  
SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO:  
[REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE  
APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro N° 1, Secretaría N° 1.  
Registro de Cámara: 11.523

adquisición de alcohol en gel para afrontar la pandemia por coronavirus en pleno incremento de la demanda, y, vale destacar, la primera transferencia obra efectuada, incluso, con anterioridad a la comunicación del primer caso positivo de la enfermedad en nuestro país. Esto último, se computa como un indicio de mendacidad en su descargo y, en consecuencia, de mala justificación.

Lo expuesto hasta aquí, paralelamente, brinda respuesta a los agravios presentados por los apelantes respecto de la situación procesal de las personas jurídicas con remisión al descargo exculpatório de [REDACTED] ya que aquéllas fueron, precisamente, quienes canalizaron activos hacia la cuenta corriente de "[REDACTED] SA".

En efecto, a partir de la información aportada por el "Banco Supervielle", se determinó que la cuenta corriente en pesos N° 03778813-003 registró, desde su apertura hasta el cierre, acreditaciones totales por la suma de \$8.586.827,24, de los cuales \$ 6.806.350, provienen de las empresas cuyo procesamiento viene apelado, pertenecientes y/o ligadas al contador José Carlos [REDACTED] [REDACTED] (que lo tiene como socio), [REDACTED] (presidida por el nombrado y secundado por su esposa Saint Pierre), [REDACTED] [REDACTED] (constituida por [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (gerente y tenedor de cuotas sociales junto a Gabriela Saint Pierre) y [REDACTED] (también presidida por [REDACTED]

Las corroboraciones apuntadas, gravitan de modo determinante sobre el agravio relativo a la invocada licitud de los fondos de las firmas y la consecuente imposibilidad

Fecha de firma: 17/07/2025

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS, SECRETARIO DE CAMARA



#39940434#464304006#20250717131518751

de sostener, según aseveran los defensores, una maniobra de lavado de activos.

Es que, acreditado como se encuentra que la firma [REDACTED] no poseía actividad comercial –como se dijo, reconocido por el propio contador en el marco de su declaración indagatoria–, puede válida y razonablemente afirmarse, en un análisis conglobado de la prueba reunida hasta el momento, que aquellos fondos que fueron canalizados desde las distintas empresas a su cuenta bancaria, formaron parte de la mecánica delictual de blanqueo de dinero de origen espurio.

En cuanto a la gestión de la cuenta corriente de “[REDACTED] SA”, la evidencia reunida informa que era llevada adelante por –en cuanto aquí importa destacar– Rubel, González y [REDACTED]

Al respecto, se anota el intercambio de mensajes citados por la jueza de grado, que hacen referencia a la atención de esa cuenta bancaria: saldos, órdenes de transferencia y chequeras.

Desde otra senda, afirma la defensa que, por consejo de [REDACTED] Edgardo [REDACTED] declaró ante los organismos públicos su participación en “[REDACTED] SA”, de modo que no puede suponerse que maquilló u ocultó su intervención o que dicha empresa haya sido una persona interpuesta. Agrega que fue el contador quien declaró los balances con la tenencia de los boletos de compraventa de los inmuebles ante la Inspección General de Justicia y el ente recaudador.

En este sentido, los hechos puestos de manifiesto por la defensa, que procuran dotar de transparencia el obrar





## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL Nº 3

Causa **FSM 18007/2024/57/CA13**, "Legajo Nº 57 -  
SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO:  
[REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE  
APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro Nº 1, Secretaría Nº 1.  
**Registro de Cámara: 11.523**

reprochado con asientos documentales que habrían sido declarados, no controvierten la hipótesis delictiva que se tiene por configurada y que ya fuera ampliamente reseñada.

Vale decir, claro está que "[REDACTED] SA" aparece informada ante los organismos registrales de la especialidad, con su pertinente composición societaria. Empero, ello en modo alguno conmueve la imputación que, como se advierte, transita otros andariveles que exceden la documentación formal de determinados actos societarios que los causantes pudieren haber materializado.

La inteligencia esbozada hasta aquí, es la que da respuesta a los restantes agravios que, como fuera adelantado, son presentados respecto de cada una de las conductas a las que alude el auto de procesamiento como si fueran compartimentos estancos, cuando el complejo entramado que se tiene por acreditado impone un análisis muy disímil, de tipo conglobado.

Nótese que, misma lógica argumentativa, se presenta con los agravios relativos a la certificación de ingresos expedida por [REDACTED] a González, para la adquisición de la camioneta Chevrolet Trailblazer que, como era conocido y será profundizado al tratar la situación procesal de este último, no fue realmente adquirida por él.

En este sentido, afirma la asistencia técnica —en concreto— que el mecanismo de presentación del documento es el que exige el Consejo Profesional de Ciencias Económicas; esto es, que el profesional verifique con documentación oficial el origen de los fondos aplicados a una operación en particular.

Fecha de firma: 17/07/2025

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS, SECRETARIO DE CAMARA



#39940434#464304006#20250717131518751

Sin embargo, la imputación es otra.

No se reprocha a José Carlos [REDACTED] un negligente desempeño laboral, sino su pertenencia a una asociación o banda destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones de lavado de activos en ejercicio de una profesión que requiere habilitación especial, entre otros delitos.

Es decir, en el caso, el contador [REDACTED] conocedor y activo interviniente de las maniobras que se venían llevando adelante con la firma "[REDACTED] SA", ofició de profesional contable, falseando la certificación de origen de fondos que González presentara para la adquisición del bien.

Dentro de la documentación presentada y suscripta por el mentado, obra además una declaración jurada que afirma, en ese carácter, que los fondos destinados a la adquisición del rodado provienen de actividades lícitas de González y se originan en fondos propios producto de su "salario mensual percibido en relación de dependencia y los honorarios y dividendos recibidos por su función como director de la Sociedad" (Cfme. archivo digital "Documentación remitida por Legajo B" de Fs. 1903/27); extremos que, tal como ya se afirmara, conocía que resultaban mendaces.

En consecuencia, más allá del esfuerzo por controvertir el significado que la instancia de origen asigna a las visitas del contador al despacho oficial del entonces Senador Nacional o a los mensajes mantenidos con clientes, lo cierto es que, la prueba hasta aquí sindicada,





## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL N° 3

Causa FSM 18007/2024/57/CA13, "Legajo N° 57 -  
SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO:  
[REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE  
APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro N° 1, Secretaría N° 1.  
Registro de Cámara: 11.523

resulta elocuente de la intervención del causante en la trama delictual que se le imputa, tanto con pleno y especializado conocimiento, como con un plan de acción concreto y determinado.

Por ello, su procesamiento será confirmado.

De igual modo, habrán de confirmarse los procesamientos de las personas jurídicas, sin que resulte óbice a tener por configurado el evento reprochado, el hecho de que, según destaca la defensa, no se investigue a otras empresas.

Desde otra senda, respecto de la situación procesal de Gabriela Saint Pierre, los recurrentes afirman que su inclusión en las actas de asamblea de la empresa "[REDACTED] SA" obedeció a un error.

Sobre el punto, destacan que, además de la equivocación de la magistrada en aludir a ella como accionista ante la IGJ cuando el organismo no inscribe accionistas, no fue autoridad de la firma.

En concreto, critican los argumentos de la a quo para sustentar la imputación, al ponderar que vive con [REDACTED] que debió conocer que sus hermanos poseían mensajes sobre manejo de dinero con su esposo y que era beneficiaria del rédito económico de las empresas.

Así, postulan que no existe prueba que acredite que la nombrada tuviera conocimiento, manejo o capacidad de acción real sobre las firmas "[REDACTED] SA" y/o "Felsir Biotecnología SRL". Que pudiera tener habilitada la firma de



cheques de la última empresa, agregan, no significa que haya hecho uso de esa facultad y, en todo caso, tampoco es prueba de su participación en los hechos.

Concluyen que el rol determinante que se asigna a Saint Pierre en ambas empresas no se encuentra probado; remitiéndose al descargo del coimputado [REDACTED] sobre la explicación de las transferencias bancarias cuestionadas.

Pues bien, en primer lugar, debe advertirse que, en función del complejo entramado que se ventila en autos, la afirmación de que la mención documental de la encausada en la composición de la empresa "[REDACTED] SA" obedeció a un error de tipeo parece, cuanto menos, cuestionable.

Sin embargo, lo cierto es que ello tampoco resulta dirimente para la dilucidación de su situación procesal que, se adelanta, habrá de ser convalidada.

En efecto, a diferencia de cuanto introduce su defensa, no se trata de un reproche sustentado con exclusividad en su vínculo matrimonial con [REDACTED] en que hayan conocido mensajes sobre manejo de dinero o en que sea beneficiaria del rédito económico de las empresas.

Por el contrario, la nombrada, además de alzarse documentalmente como accionista de "[REDACTED] SA" en las actas de asamblea de los días 22 de enero de 2020 y 2021, y 24 de enero de 2022 (Cfme. cuerpo digitalizado I, Fs. 49/51v.) -por equivocación, según se postula-, es autoridad de dos de las empresas que aparecen efectuando inyecciones dinerarias en aquélla; actos a los que ya nos referimos anteriormente.

En este sentido, es menester puntualizar que, atendiendo a la composición fáctica de la maniobra, las





## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL Nº 3

Causa **FSM 18007/2024/57/CA13**, "Legajo Nº 57 -  
SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO:  
[REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE  
APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro Nº 1, Secretaría Nº 1.  
**Registro de Cámara: 11.523**

acciones de las sociedades por donde se canalizarían sumas de dinero no podían dejarse en manos de personas extrañas al ámbito de intimidad de los intervinientes; en el caso, en la persona de máxima confianza del contador. En consecuencia, su pretendida ajenidad o lejanía no puede ser favorablemente atendida.

Paralelamente, debe ponderarse el nivel de instrucción de la encartada, profesional, accionista y directiva de otras empresas además de las ya mencionadas —como "Logística Médica SRL" y "LM Service SA" (Cfme. archivo "Supervielle y NOSIS [REDACTED] de Fs. digitales 1313)—, y cónyuge conviviente del nombrado, también profesional pero en ciencias económicas. En el caso concreto, tales condiciones personales, aunadas a su intervención en otras firmas y a los restantes elementos antes ponderados, impiden que pueda válidamente sostenerse un desconocimiento como aquel sobre el que apoya su defensa.

Es por eso mismo, vale destacar aunque no resulte dirimente, que pierde virtualidad la queja atinente a un presunto error de tipeo en su incorporación como accionista de "[REDACTED] SA", ya que ese supuesto error —producido durante 3 años consecutivos—, analizado en contexto, pareciera más bien corresponderse a un accionar deliberado.

A su vez, tampoco puede soslayarse que, si se hubiere correspondido a un error de tipeo, tal como remarca su defensa, se contó con tiempo suficiente para su enmienda.

Por lo demás, en línea con cuanto se viene exponiendo y, a todo evento, corresponde destacar que el delito en el que se subsumiera su conducta resulta doloso,

Fecha de firma: 17/07/2025

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS, SECRETARIO DE CAMARA



#39940434#464304006#20250717131518751

que admite de forma plena la posibilidad de un obrar con dolo eventual. De tal modo, no es requisito la demostración acabada del positivo conocimiento por parte del sujeto activo en torno a la ilegal procedencia del dinero que se está blanqueando, sino que resultará suficiente acreditar, a partir de las particularidades que se presenten, que pudo representarse las sospechas del caso, sin que le importen las consecuencias.

Con base en ello, el análisis integral de las constancias que nutren el legajo permite, sana crítica mediante, representar en la imputada, al menos, sospechas de la actividad marginal sobre la cual brindó una efectiva contribución, debiendo desestimarse las quejas que procuran deslindarla del reproche como si resultara totalmente ajena a la maniobra.

Lo expuesto hasta aquí, autoriza a homologar la decisión adoptada a su respecto por la magistrada de grado.

Por último, corresponde hacer mención a dos cuestiones introducidas por los defensores.

Por un lado, en distintos pasajes de los escritos recursivos, los Dres. [REDACTED] y [REDACTED] se agravian de que la magistrada no adopte las mismas conclusiones respecto de otras personas sindicadas en el expediente o que, según postulan, no se las investigue.

Amén de que el expediente se encuentra en pleno trámite de instrucción y de la eventual responsabilidad que pudiere caberle a otras personas físicas y/o jurídicas en el marco de la investigación que se sustancia, el argumento que introduce la parte no controvierte la hipótesis delictiva







## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL Nº 3

**Causa FSM 18007/2024/57/CA13**, "Legajo Nº 57 -  
**SOLICITANTE:** [REDACTED] **SA IMPUTADO:**  
[REDACTED] **JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE**  
**APELACION**", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro Nº 1, Secretaría Nº 1.  
**Registro de Cámara: 11.523**

que se tiene por acreditada, ni las concretas imputaciones que reposan en cabeza de sus asistidos. En consecuencia, nada corresponde decir sobre el particular.

Por otro lado, sostienen que, por imperio de lo normado en el Art. 2 del CP, debió aplicarse en autos el régimen de la ley 27.739 y no la ley 26.683, lo que, según afirman, tiene incidencia directa en la imputación, ya que ninguna de las operaciones atribuidas a las personas de existencia ideal ni aquellas indirectamente imputadas a [REDACTED] y a Saint Pierre, alcanzan la condición objetiva de punibilidad.

Al respecto, debe hacerse notar que el hecho de que alguna de las sumas involucradas en las transferencias efectuadas por intermedio de las personas jurídicas pudiere, eventualmente y en forma aislada, no alcanzar el piso previsto por el nuevo Art. 303 del CP, ello no resulta suficiente para acoger favorablemente la pretensión.

En efecto, aquéllas vienen cauteladas por su intervención en una maniobra global de lavado de activos, en la que se advierte íntima vinculación de las personas jurídicas entre sí y con los coencausados [REDACTED] y Saint Pierre —entre otros—, lo que impide considerar cada transacción de modo escindible como, nuevamente, pretende la defensa.

En consecuencia, la cuestión introducida no controvierte el juicio de tipicidad, amén del contenido de injusto que deberá ser valorado en el momento procesal oportuno.

Por ello, el agravio habrá de ser desechado.

Fecha de firma: 17/07/2025

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS, SECRETARIO DE CAMARA



#39940434#464304006#20250717131518751

**b.- De la situación procesal de Rodolfo Daniel González, Ernesto Javier Rubel y Adriana Crucitta.**

Más allá de los agravios que fueran objeto de tratamiento en el considerando III, la defensa de Rodolfo Daniel González, en lo medular, entiende que no hay indicios concretos sobre su intervención en la estructura delictiva.

Sostiene que el análisis efectuado resulta fragmentario y omite mencionar que el nombrado carece de formación técnica, financiera y contable. Afirma, además, que no existen constancias de que haya realizado actos de disposición u obtenido beneficio económico alguno, destacando la ausencia de una descripción concreta de los supuestos actos delictivos en los que habría participado.

Por su parte, alega que su rol en la empresa "██████ SA" fue simbólico, meramente nominal y ocasional, sin implicancia delictiva.

Por otro lado, respecto de Adriana Cecilia Crucitta, la defensa también invoca insuficiencia probatoria y considera que la resolución no identifica acciones específicas que puedan serle imputadas.

Al respecto, argumenta que no se encuentra acreditado que aquélla haya tenido intervención operativa ni conocimiento del destino de fondos transferidos por la empresa "Peninsular Sudamericana SAS".

En esa senda, objeta que se la pretenda vincular penalmente —según entiende— por su relación de pareja con el coencausado González, destacando que la responsabilidad penal es personal.





## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL Nº 3

Causa **FSM 18007/2024/57/CA13**, "Legajo Nº 57 -  
SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO:  
[REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE  
APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro Nº 1, Secretaría Nº 1.  
**Registro de Cámara: 11.523**

Por último, formula una crítica a que su asistida haya sido considerada "funcionaria pública".

Por otra parte, la asistencia técnica de Ernesto Javier Rubel considera que no se describen hechos con precisión ni se delimita su participación funcional en los eventos delictivos.

Afirma que la magistrada realiza una imputación conjunta, genérica y basada en conjeturas, lo que vulnera el principio de legalidad y de culpabilidad por el hecho propio.

Luego, enfatiza que Rubel fue incorporado a la empresa "[REDACTED] SA" por pedido de su primo -el ex Senador Nacional [REDACTED] sin poseer conocimientos jurídicos, societarios o financieros. Que actuó como un mero facilitador formal, sin capacidad de decisión ni conocimiento de la ilicitud de las operaciones. Destaca que no obtuvo beneficio alguno, incremento patrimonial ni participación deliberativa.

Por último, pone de resalto que los mensajes de "WhatsApp" valorados por la instancia de origen, solo lo ubican cumpliendo mandatos simples (trámites o firmas), sin intervención en la planificación ni en la ejecución de las presuntas maniobras delictivas.

Pues bien, en primer lugar, corresponde señalar que, a diferencia de cuanto postulan las defensas, el pronunciamiento que resuelve la situación procesal de sus asistidos enuncia debidamente los hechos atribuidos a cada uno de ellos y cuenta con todos los requisitos que exige la normativa procesal vigente (Cfme. Art. 308 del CPPN).

Fecha de firma: 17/07/2025

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS, SECRETARIO DE CAMARA



#39940434#464304006#20250717131518751

Sentado lo expuesto, puede afirmarse que la prueba reunida hasta el momento revela, con el grado de precariedad inherente a la etapa procesal que se transita, la existencia de un binomio de testaferros conformado por los encausados González y Rubel, que fungían como las caras visibles de la persona jurídica "██████ SA", simulando una actividad comercial que no era desarrollada. Este último extremo fue también reconocido por Rubel, además de ██████ como ya se sostuviera.

Pero, amén del expreso reconocimiento por parte de los causantes, durante el allanamiento realizado en una de las sedes del estudio contable de ██████ (calle Andrés Baranda N° 388 de Quilmes), se secuestró copia de los balances de los ejercicios finalizados el 30 de septiembre de 2020, 2021 y 2022 (Cfme. "caja secuestro 1"), todos firmados por Rubel y ██████ de los que surgen ventas y resultados brutos en cero. El certificante de dichos documentos comerciales, como auditor independiente, fue el propio contador; mientras que Rubel los rubricó en carácter de autoridad de la firma.

En línea con ello y, en lo atinente a la adquisición de las unidades funcionales en el edificio "Live", alcanza con señalar que lo actuado revela la existencia de personas interpuestas y una sociedad pantalla, tendientes a ejecutar distintas maniobras dirigidas a fingir ingresos inexistentes y disimular la procedencia ilícita del dinero utilizado para la compra de aquellos inmuebles radicados en el Litoral.





## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL N° 3

Causa **FSM 18007/2024/57/CA13**, "Legajo N° 57 -  
SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO:  
[REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE  
APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro N° 1, Secretaría N° 1.  
**Registro de Cámara: 11.523**

En este sentido, surge de la declaración testimonial de Matías Pérez —de "Constructora del Paraná"— que, a partir de la indicación de [REDACTED] se designó a Rubel (a esa fecha presidente de "[REDACTED] SA") como la persona que firmaría los boletos de compraventa de las unidades funcionales. En dicha ocasión, declaró el testigo que, una vez cerrada y pagada la primera operación inmobiliaria, "[REDACTED] me avisó que el departamento estaría a nombre de una empresa de su propiedad y que me contactaría para aportar los datos de la sociedad". Fue así que, según señaló, lo contactó por la aplicación "WhatsApp" el contador [REDACTED] quien le envió la documentación de la empresa y le avisó que Rubel sería la persona que firmaría el boleto, circunstancia que se repite en las otras dos operaciones (Fs. 931/3 del cuerpo digitalizado V. Similar relato fue brindado por Ariel Lifschitz a Fs. 934/5v. de las mismas actuaciones).

En efecto, en el procedimiento realizado oportunamente en la empresa desarrolladora del edificio, se incautó copia de los tres boletos de compraventa labrados; todos firmados por Ernesto Javier Rubel por "[REDACTED] SA"—12/05/2021, 16/03/2021 y 20/10/21— (obstante en sobre papel madera identificado como "cadena de custodia 2, domicilio Ernesto Bavio 97, Concordia").

Respecto del nombrado, la información reunida por la instrucción refleja que, a la fecha de adquisición de los inmuebles, era empleado de la firma "Pirámide Constructora SA" (2021 y 2022) y "Vecchio SRL" (2023), percibiendo remuneraciones anuales que no le hubiesen permitido adquirir

Fecha de firma: 17/07/2025

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS, SECRETARIO DE CAMARA



#39940434#464304006#20250717131518751

esos bienes (\$501.277,67 en 2021, \$1.090.228,57 en 2022 y \$2.922.537,20 en 2023). Tampoco, si a ello se le suman las facturas que emitió en aquellos períodos (\$1.030.000 en 2021, \$1.687.200 en 2022 y \$3.234.480 en 2023). Es más, ningún ingreso formal recibió por ser presidente de "██████████ SA"; esto último, también reconocido por el nocente en el descargo presentado por escrito.

Ahora bien, la cronología de los eventos que se tienen por acreditados informa que, luego de los actos descriptos y, ante un requerimiento efectuado por el ente recaudador, los representantes de "██████████ SA" intentaron justificar parte del dinero ingresado en sus cuentas bancarias con dos préstamos que habían sido gestionados para un proyecto destinado a la elaboración de fertilizantes y que, al no haberse concretado, se aplicaron finalmente a la adquisición de las propiedades.

Así, se informó y documentó la recepción de un préstamo de \$3.000.000 otorgado el 13/11/2019 a Rodolfo Daniel González -presidente de "██████████ SA"- por parte de la firma "Estructuras Financieras Regionales SA". A su vez, otro préstamo posterior de \$3.780.000 brindado por la misma firma, pero a Ernesto Javier Rubel -en ese entonces, presidente de "██████████ SA"-.

Sin embargo, el presidente de la firma "Estructuras Financieras" desconoció haber intervenido en el otorgamiento de los créditos, sin reconocer los documentos respectivos (Cfme. testimonio de Gabriel Baglivo, de Fs. 961/2 del cuerpo digitalizado V).





## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL N° 3

Causa FSM 18007/2024/57/CA13, "Legajo N° 57 -  
SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO:  
[REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE  
APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro N° 1, Secretaría N° 1.  
Registro de Cámara: 11.523

Luego, la prueba reunida revela una ulterior intervención con relevancia típica de ambos justiciables, en la transferencia de los departamentos adquiridos por "[REDACTED] SA", ya que fue verificado otro ardid desplegado mediante la simulación de mutuos entre la empresa (Rubel) y González.

Sobre el particular, obra agregada al expediente copia de la cesión de boleto de compraventa y rescisión de contrato de mutuo, del 31 de octubre de 2023, celebrada entre los causantes (Cfme. "Documental aportada en procedimiento de Av. Belgrano 1217 - 12/12/2024" de Fs. digitales 1063 y "Digitalización documentación secuestrada calle Andrés Baranda" de Fs. digitales 2684 del principal).

Se desprende del documento que, el 20 de diciembre de 2020, se celebró un mutuo por \$30.000.000 y USD 200.000 de González a "[REDACTED] SA", que entregó 4 pagarés. Que las cuotas uno y dos habían sido prorrogadas con intereses, ascendiendo la deuda, al 31/10/2023, a USD 430.325 y que, a los efectos de cancelar el mutuo, ambos resolvían la cesión de los boletos de compraventa de las unidades funcionales del edificio ubicado en Santiago del Estero N° 511 y 517, de Paraná, provincia de Entre Ríos.

Como fácilmente se advierte, el cuadro fáctico y probatorio reseñado hasta aquí, permite sostener que se documentó un préstamo simulado del encausado González a la firma "[REDACTED] SA", cuyo saldo se cancelaría con la transferencia de los departamentos en cuestión. Ello, a fin de disimular el origen del dinero aplicado a la adquisición de los departamentos; sin que, por lo demás, de estar a la información remitida por la entonces AFIP y los ingresos

Fecha de firma: 17/07/2025

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS, SECRETARIO DE CAMARA



#39940434#464304006#20250717131518751

percibidos como empleado de la Biblioteca del Congreso de la Nación, el nombrado haya contado con capacidad económica-financiera para afrontar el empréstito.

A lo expuesto, corresponde agregar que, de estar al contenido de uno de los equipos celulares del contador [REDACTED] González pretendió acogerse a un blanqueo, en uno de cuyos ítems, el monto coincidía casualmente con la supuesta deuda que "[REDACTED] SA" mantenía con él (Cfme. descripción 13).

En consecuencia, de lo expuesto hasta aquí, puede válidamente concluirse que, mediante el supuesto mutuo y la cesión de los boletos de compraventa de las unidades funcionales, los imputados documentaron una transferencia de los inmuebles adquiridos por "[REDACTED] SA" con dinero de procedencia ilícita, procurando otorgarle apariencias genuinas.

Por tales motivos, los agravios introducidos por las defensas de los justiciables no pueden prosperar, ya que ambos estaban en pleno conocimiento de que la firma "[REDACTED] SA" -cuya cuenta corriente, como se dijo, era gestionada por ambos y por el coencausado [REDACTED] carecía de capacidad económica-financiera, y constituía un ropaje para disimular al verdadero comprador de los inmuebles.

Luego, aunque ya nos referimos al punto cuando tratamos la situación procesal de José Carlos [REDACTED] debemos aquí hacer nuevamente mención a la adquisición de la camioneta Chevrolet Trailblazer, dominio AE-797-OJ.

El rodado fue comprado el 17 de agosto de 2021 a la agencia "RUDAS", con la intervención de la concesionaria "HCH SA".







## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL N° 3

**Causa FSM 18007/2024/57/CA13**, "Legajo N° 57 -  
**SOLICITANTE:** [REDACTED] **SA IMPUTADO:**  
[REDACTED] **JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE**  
**APELACION**", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro N° 1, Secretaría N° 1.  
**Registro de Cámara: 11.523**

De la documentación acompañada por esta última firma, surge que el vehículo fue adquirido y facturado a Rodolfo Daniel González el 14 de mayo de ese año (Cfme. copia de solicitud de vehículo N° 8.722 y copia de factura N° 00004919 obrantes en el sobre marrón identificado como "secuestro n° 1" del Domicilio Av. Ángela de la Casa N° 462, Rafaela, Santa Fe).

La prueba reunida determina que, con el objetivo de disimular el origen ilícito del dinero que habría sido utilizado para la obtención del bien, se recurrió nuevamente a González como persona interpuesta, quien se alzaría como comprador y titular registral de la unidad ante los organismos pertinentes -DNRPA y ARCA-.

En efecto, como ya se relatara, surge de las copias digitalizadas del legajo B la adquisición del vehículo por parte del causante; trámite para el cual, fue presentada la certificación y declaración jurada de origen lícito de fondos, efectuada por el contador [REDACTED] a las que ya se hiciera referencia.

Corresponde reiterar aquí, que lo actuado permite sostener que González estaba en pleno conocimiento de que el verdadero adquirente de la camioneta era Edgardo [REDACTED]

Conforme surge del Legajo B del dominio, desde el 18 de mayo de 2021, este último y su cónyuge Liliana Di Lello contaban con cédulas de autorización para la conducción del vehículo; permisos que fueron revocados por González el 29 de agosto de 2024.

Tampoco se soslaya el secuestro de distintas infracciones de tránsito expedidas sobre el dominio, habidas



en el marco de la diligencia de allanamiento practicada oportunamente en la oficina del entonces Senador Nacional (Cfme. "Digitalización documentación - secuestro 8 -oficinas senado" de Fs. digitales 1681/92 del principal).

Pero, a su vez, en apoyo de tal afirmación, se cuenta con el testimonio de Sebastián Mariano Valdés -encargado de uno de los edificios en los que habría residido [REDACTED] quien dio cuenta del extremo que se tiene por acreditado (Fs. 537/v. del cuerpo digitalizado III).

Sobre el mismo tópico, en el teléfono perteneciente a Liliana Di Lello se advirtió que poseía almacenada una red *WIFI* titulada "Trailblazer", con contraseña "maxaugus", en posible referencia a los dos hijos de la pareja (Cfme. d extremo que se tiene por acreditado descripción N° 10).

Para finalizar, de estar a lo informado en autos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero -PV-2024-04327443-AFIP-SDGCAD-, Edgardo [REDACTED] fue detenido a raíz de los hechos que resultaron de público conocimiento, intentando cruzar la frontera hacia la República de Paraguay, a bordo del mismo rodado Chevrolet Trailblazer adquirido a nombre del coencausado González (Fs. 1060 del expediente digital); extremo que, sumado a lo anterior, permite avalar la hipótesis delictiva introducida en relación al vehículo y la intervención, en los términos enunciados, de Rodolfo Daniel González.





## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL N° 3

**Causa FSM 18007/2024/57/CA13**, "Legajo N° 57 -  
**SOLICITANTE:** [REDACTED] **SA IMPUTADO:**  
[REDACTED] **JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE**  
**APELACION**", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro N° 1, Secretaría N° 1.  
**Registro de Cámara: 11.523**

Nótese que, con el avance de la pesquisa y la producción de distintas medidas de prueba, la cuestión fue incluso reconocida sin ambages por Adriana Crucitta, pareja del encausado (Fs. digitales 3702).

Ahora bien, por último, corresponde abordar aquello atinente a la inyección dineraria realizada hacia la cuenta bancaria desde la cual se habrían abonado las expensas de las unidades funcionales adquiridas en la provincia de Entre Ríos, momento en el cual asume protagonismo, junto con Rodolfo Daniel González, la coencausada Crucitta.

Ambos eran, respectivamente, director suplente y presidente de la firma "Peninsular Sudamericana SAS".

Del análisis de los movimientos bancarios de la caja de ahorro en pesos N° 068-40-337148/4 del "BBVA", titularidad de Iara Guinsel Costa, se advierte la recepción de una transferencia bancaria de fecha 22 de enero de 2024 por \$1.000.000 desde una cuenta vinculada al CUIT 30716517345, de "Peninsular Sudamericana SAS". En la misma cuenta también se recibieron, con fecha 13 de noviembre de 2024, \$4.000.000 transferidos por Rodolfo Daniel González (Fs. 2554/71 del expediente digital). Es decir, que ambos fondeaban la cuenta con la que se habrían solventado gastos de administración de las propiedades en la ciudad de Paraná.

A este último respecto, corresponde agregar que, de estar al informe elevado recientemente por la instancia de origen (Fs. digitales 3879/80), la firma "Peninsular Sudamericana SAS" no sólo transfirió a la cuenta de Guinsel Costa el monto antes referido, sino que además realizó,



cuanto menos, 15 transferencias por un total de \$ 10.660.000 entre junio de 2023 y junio de 2024 a Edgardo [REDACTED] (Fs. digitales 3879/80).

Las circunstancias apuntadas, analizadas en contexto, permiten sostener que tanto González como Crucitta estaban al corriente de la utilización de su empresa en el entramado investigado, como del origen y destino que sería dado a los fondos.

En este sentido, resulta elocuente el intercambio telefónico producido entre José Carlos [REDACTED] y un contacto identificado como "Perro", en el que, con fecha 24/12/2024, el primero comenta: *"Salió todo peninsular... Menos mal que no eras socio"* (Cfme. descripción N° 13). El tenor de esta comunicación, deja entrever el conocimiento que los miembros de la organización tenían sobre el uso de la firma con la ilícita finalidad apuntada.

Por último, cabe señalar que, al momento de ser recibida en audiencia indagatoria ampliatoria a pedido de su defensa, la encausada efectuó un amplio relato de su historia personal, laboral y profesional. Al ser específicamente preguntada sobre la transferencia de \$ 1.000.000 en favor de Guinsel Costa, dijo haber sido quien la ejecutó: *"[S]iempre la administración de la empresa estuvo a mi cargo"*. Sin embargo, en punto a esos fondos y su destino, se limitó a referir: *"Lo hice por pedido de Daniel [González], fue un favor. No fue un préstamo, porque esa plata no vuelve, no fue devuelta. Respecto del destino, desconozco qué se hizo con esa plata"*. Luego, al ser





## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL Nº 3

Causa **FSM 18007/2024/57/CA13**, "Legajo Nº 57 -  
SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO:  
[REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE  
APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro Nº 1, Secretaría Nº 1.  
**Registro de Cámara: 11.523**

interrogada sobre transferencias a [REDACTED] y su motivo, dijo que: "podría llegar a haber alguna transferencia, pero no recuerdo. En caso de que haya deben ser por pedido de Daniel por algún pago que tendría que hacer" (Fs. digitales 3702 del principal). A este último respecto, recuérdese la existencia de 15 transferencias emanadas de la firma cuya administración siempre estuvo a su cargo, en el lapso de doce meses, por un monto de \$ 10.660.000.

Como se advierte, los elementos probatorios hasta aquí reunidos y analizados integralmente, confrontados con las imprecisiones de la encausada al momento de brindar explicaciones, convencen a este Tribunal de la mendacidad de sus dichos y brindan razonable andamiaje al juicio de responsabilidad efectuado por la jueza de grado.

En definitiva, con lo expuesto, se tiene por acreditado con el preliminar alcance que demanda la instancia que, a través de la firma "Peninsular Sudamericana SAS" de González y Crucitta, se canalizaba dinero, cuanto menos, hacia la cuenta utilizada para afrontar los gastos de administración de los departamentos adquiridos en la provincia de Entre Ríos.

Finalmente, con relación al agravio afincado en que la nombrada no era funcionaria pública, sólo cabe hacer notar que fueron secuestrados en autos certificados que dan cuenta de su labor con el entonces Senador Nacional Edgardo [REDACTED] extremo que, a su vez, fue reconocido por la encausada en el marco de su declaración indagatoria ampliatoria de Fs. 3702.

Fecha de firma: 17/07/2025

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS, SECRETARIO DE CAMARA



#39940434#464304006#20250717131518751

Entonces, por los motivos vertidos hasta aquí, los procesamientos de González, Rubel y Crucitta, habrán de ser confirmados.

**c.- De la situación procesal de Ezequiel Gustavo Bovetti.**

En el entramado delictual que se tiene por reconstruido, la jueza de grado deriva la intervención dolosa de Bovetti, en concreto, de la interpretación de los extremos probatorios que sucintamente se indican a continuación.

Por un lado, sostiene que, además de ser presentado por Ferreyra -ante Rubel- como socio de [REDACTED] en el estudio contable, era quien atendía al entonces presidente de "[REDACTED] SA" por asuntos de la firma. Para ello, destaca un diálogo mantenido entre [REDACTED] y Rubel, en el que el primero le pide que hable un tema bancario con Bovetti. El mismo día, Rubel le remite a Bovetti el contacto de la persona asignada en el "Banco Supervielle" para la atención de la cuenta.

Luego, pondera que, de acuerdo a la información recuperada de dispositivos utilizados por [REDACTED] (Cfme. descripciones N° 11 y 13), Bovetti formaba parte de los grupos de la aplicación "WhatsApp" en los que se intercambiaba la información más relevante del estudio contable y de la tesorería de "[REDACTED] SA".

A su vez, que de elementos de prueba hallados en el estudio de calle Andrés Baranda, surge que tenía conocimiento de los cargos que ocupaba y había ocupado





## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL Nº 3

Causa **FSM 18007/2024/57/CA13**, "Legajo Nº 57 -  
SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO:  
[REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE  
APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro Nº 1, Secretaría Nº 1.  
**Registro de Cámara: 11.523**

Edgardo [REDACTED] en la función pública, y que intervino en la formulación de sus declaraciones juradas patrimoniales.

En ese sentido, puntualiza la magistrada la impresión de un correo electrónico, de fecha 28 de septiembre de 2020, en el que Bovetti remite a Carolina Saint Pierre, con copia a [REDACTED] y a un usuario denominado "m.vigne@[REDACTED].com.ar", indicaciones sobre la presentación de la declaración jurada del entonces Senador Nacional ante la Dirección General de Auditoría del Honorable Senado de la Nación.

Concluye, en cuanto aquí importa, que Ezequiel Gustavo Bovetti colaboró en el entramado de acciones para aparentar que "[REDACTED] SA" se trataba de una empresa real.

Desde otra senda, entiende la jueza de grado que la maniobra fraudulenta vinculada a los dos préstamos gestados para justificar los fondos de adquisición de las unidades funcionales en la ciudad de Paraná, contó con la activa participación de Bovetti, destacando: la búsqueda en diciembre de 2024 junto con [REDACTED] de información de la firma "[REDACTED] SA"; un video explicativo en el que se le indicaría a González cómo acogerse a un procedimiento de blanqueo de capitales; y una consulta que le efectuara [REDACTED] sobre el vínculo que poseían con "EDEKOM", lo cual -a su entender- colisiona con la versión exculpatoria brindada, en el sentido que Bovetti no conocía ni intervenía en el entramado delictivo.

Por último, pondera que actuó como contador y auditor externo de la firma "NOPOR", y la conversación observada en uno de los celulares del coencausado [REDACTED]



en la que éste le indica a Bovetti, ante la difusión de una noticia por un presunto negocio ilícito con el tendido de fibra óptica: "otra más que no tenemos nada que ver" y "van por otro lado", lo que resultaría demostrativo de la preocupación compartida por los causantes en plena tramitación del presente expediente.

A criterio de la Sala, los indicios que la magistrada toma en consideración respecto de Bovetti, no resultan suficientes para sustentar la responsabilidad penal que le asigna.

En este sentido, no se advierte de los fundamentos del decisorio, cuál es su intervención concreta, con relevancia típica, en cada uno de los pasos del entramado delictual que se tiene por configurado a su respecto en el auto apelado.

Cualquier vacío probatorio o interpretativo que pueda suscitarse, no puede ser válidamente suplido con la reiterada mención de que el estudio era también de su propiedad, o que era liderado en conjunto con el coencausado

[REDACTED]

Esta última cuestión, que la jueza de grado pareciera considerar relevante merece, en todo caso, ser profundizada.

Nótese que su rol secundario en la oficina no sólo fue afirmado por [REDACTED] sino a su vez por Débora Ferrera —con procesamiento firme—, quien lo identificó como encargado del estudio propiedad de este último; siendo que,







## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL N° 3

Causa **FSM 18007/2024/57/CA13**, "Legajo N° 57 -  
SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO:  
[REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE  
APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro N° 1, Secretaría N° 1.  
**Registro de Cámara: 11.523**

por su parte, la evidencia reunida hasta el momento sitúa a [REDACTED] como el responsable contable primario de la atención de la firma "[REDACTED] SA".

Por último, la magistrada asevera que el estudio tenía asentado un engranaje para canalizar grandes sumas de dinero a partir de movimientos financieros como el investigado. Cita como ejemplo, un mensaje remitido por Bovetti al grupo laboral que refiere: "Tenemos un caso práctico real para poner en práctica con Semak. Ingresaron 97M. Tenemos que ver cómo se respalda esto".

La defensa del nocente hizo expresa alusión a este mensaje, tanto en el recurso interpuesto como en la audiencia celebrada en los términos del Art. 454 del CPPN, alegando que, al momento de ese diálogo, eran muchas las consultas recibidas para regularizar situaciones en los términos de la ley de blanqueo N° 27.743, correspondiendo la cuestión al ámbito profesional de su asistido.

Sobre el punto, la defensa esbozada se aprecia, cuanto menos de momento, razonable. Máxime cuando, vale destacar, el mensaje que valora la *a quo* alude a una empresa que no se advierte vinculada con los hechos que se investigan en autos.

Por lo expuesto hasta aquí, el procesamiento de Ezequiel Gustavo Bovetti habrá de revocarse, disponiendo a su respecto la falta de mérito y, en consecuencia, su inmediata libertad (Art. 309 del CPPN), sin perjuicio de la prosecución de la investigación a su respecto, que deberá ser profundizada por la instancia de origen.

Fecha de firma: 17/07/2025

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS, SECRETARIO DE CAMARA



#39940434#464304006#20250717131518751

**d.- De la situación procesal de Rita Soledad**

**Machuca.**

En el marco de la compleja estructura asociativa y delictiva que describe el auto traído a revisión, la jueza de grado le atribuye a la encausada el haber sido comodataria, a título gratuito, en un contrato relacionado con uno de los departamentos del edificio "Live" de Paraná, provincia de Entre Ríos.

En esa senda, la identifica como una de las personas de extrema confianza de Edgardo [REDACTED] siendo quien, según se enuncia, cumplió un rol relevante respecto de las unidades adquiridas por la empresa "[REDACTED] SA".

Al respecto, afirma que Machuca, en conocimiento de la maniobra, encarnó distintos actos de administración de aquellos inmuebles, los que fueron esenciales para su mantenimiento y sirvieron para disimular al verdadero titular.

Puntualiza la magistrada que, a partir del procedimiento efectuado el 20/12/2024 en las oficinas del mentado [REDACTED] en el Honorable Senado de la Nación, fue incautado un contrato de comodato del 3 de octubre de 2023, en donde "[REDACTED] SA" (comodante) cede el inmueble ubicado en la calle Santiago del Estero 511/517, piso 13 "A" de Paraná, en comodato a título gratuito a Rita Machuca (comodatario). Dispone el documento, a su vez, que Machuca se encontraba a cargo de gestionar la habilitación de los servicios básicos de esa unidad. Sostiene la a quo, que esta cláusula le agrega una capa más de lejanía a la trazabilidad de los bienes.





## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL Nº 3

**Causa FSM 18007/2024/57/CA13, "Legajo Nº 57 - SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO: [REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro Nº 1, Secretaría Nº 1.**  
**Registro de Cámara: 11.523**

Ello en tanto, a su vez, Machuca —de acuerdo a la declaración del encargado del edificio— nunca vivió allí, de lo que se deriva que aquel documento se elaboró al solo efecto de otorgar un instrumento para gestionar los servicios de los departamentos y, así, evitar exponer a su verdadero titular.

Por último, en lo sustancial, destaca que según fuera informado por "TELECOM", fue la titular de los servicios de telefonía e internet de aquel departamento; siendo instalados el 10/11/2023 y dados de baja el 06/01/2025, con posterioridad a los procedimientos realizados en autos.

Pues bien, de lo expuesto precedentemente, se advierte que la concreta intervención que se le atribuye a Rita Machuca, vinculada a la suscripción de un comodato para la instalación y registro a su nombre de ciertos servicios de la unidad funcional en cuestión, resulta insuficiente para ser subsumida típicamente en la figura por la que viene procesada como coautora, ante el complejo entramado delictual descripto por la instancia de origen.

En efecto, es cierto que resulta llamativo que la nombrada haya registrado a su nombre servicios del departamento; lo que excedería una simple gestión de alta, como presenta su defensa.

Sin embargo, ello, en ausencia de otros elementos que abonen la inteligencia de una concreta intervención con relevancia típica en la empresa criminal, impone modificar su actual situación procesal en los términos del Art. 309 del CPPN.

Fecha de firma: 17/07/2025

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS, SECRETARIO DE CAMARA



#39940434#464304006#20250717131518751

Es que, considerarla coautora de los eventos ventilados en autos, a la luz de la prueba que hasta el momento la incriminaría, se advierte –cuanto menos– apresurado.

En este sentido, nótese que el comodante es la propia empresa “[REDACTED] SA” y que la suscripción de los boletos de compra-venta labrados con la desarrolladora “CADUS” por la adquisición de las unidades obran firmados por el coencausado Rubel, en ese entonces, presidente de aquella empresa.

En consecuencia, la sola y específica intervención que se atribuye a la causante no se aprecia con la idoneidad suficiente para dificultar, según afirma la magistrada de grado, ni la trazabilidad de los bienes ni para disimular –con alguna perspectiva de éxito– al verdadero titular de los inmuebles.

Paralelamente, la construcción que sobre ello pretende complementarse con la mención a las video-filmaciones incautadas en propiedad de Edgardo [REDACTED] a su rol administrativo en la Gobernación de Entre Ríos o a una reunión pactada en el Senado con el imputado González, no se aprecian ni conectadas lógicamente entre sí ni concluyentes, cuanto menos por el momento, de la hipótesis investigativa que se enuncia a su respecto.

Por lo expuesto, el procesamiento de Machuca habrá de revocarse, disponiendo la falta de mérito y, en consecuencia, su inmediata libertad (Art. 309 del CPPN), sin perjuicio de la prosecución de la investigación.





## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL N° 3

Causa FSM 18007/2024/57/CA13, "Legajo N° 57 -  
SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO:  
[REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE  
APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro N° 1, Secretaría N° 1.  
Registro de Cámara: 11.523

### VII.- De los embargos.

En cuanto a las críticas formuladas con relación a los montos de la medida de cautela real fijada respecto de José Carlos [REDACTED] Gabriela Patricia Saint Pierre, Ernesto Javier Rubel, Rodolfo Daniel González y las personas jurídicas, tomando en consideración el pago de las costas causídicas y la pena de multa prevista por el Art. 303, Inc. 1°, del CP, aquéllos se ajustan razonablemente a las circunstancias del proceso y a los parámetros establecidos en el Art. 518 del ordenamiento adjetivo, por lo que habrán de confirmarse.

Por otro lado, las mismas premisas autorizan a reducir el monto que fuera fijado respecto de Adriana Cecilia Crucitta, el que habrá de estipularse en la suma de \$ 1.000.000.000.

Finalmente, en lo que respecta a la ausencia de fundamentos que se invoca, se estima que la decisión, sobre tal extremo, cumple con la manda normada en el Art. 123 del ordenamiento adjetivo.

### VIII.- De los recursos de apelación interpuestos contra el dictado de la prisión preventiva.

En lo atinente al dictado de la medida de cautela personal, criticado por las defensas técnicas de Rodolfo Daniel González, Adriana Cecilia Crucitta, Ezequiel Gustavo Bovetti, José Carlos [REDACTED] Gabriela Saint Pierre, Ernesto Rubel y Rita Soledad Machuca, corresponde señalar que ese planteo no puede convertirse en un argumento común para cuestionar, por cualquier medio, la legitimidad del

Fecha de firma: 17/07/2025

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS, SECRETARIO DE CAMARA



#39940434#464304006#20250717131518751

encierro, cuando el propio catálogo procesal establece la vía excarcelatoria como régimen tuitivo del derecho constitucional a la libertad provisoria bajo caución durante el trámite del proceso.

En ese direccionamiento, cabe señalar que, conforme lo preceptuado en el Art. 311 del código ritual, sólo es apelable el procesamiento, puesto que aquélla es su consecuencia, en virtud de la valoración que efectúa el juez de conformidad con los Arts. 312 y 319 del mismo cuerpo legal; este último, también alcanzado por las disposiciones de los Arts. 221 y 222 del CPPF.

Así, se ha dicho que la vía que prevé el instituto de la excarcelación resulta ser la más adecuada, idónea, útil y efectiva para reclamar a los jueces las garantías de la libertad del imputado durante el proceso, marco en el cual se deben tratar las cuestiones aquí planteadas (ver, entre otras, causa 1831/11, Rta. el 19/10/11, Reg. N° 8854 de la Secretaría Penal N° 1; causa 1570/11, Rta. el 28/10/11, Reg. N° 5789, y causa 6650, Rta. el 23/08/13, Reg. N° 6517 de la Secretaría Penal N° 3, con sus citas).

En consecuencia, los recursos, en este punto, han sido erróneamente concedidos.

Por todo lo expuesto, el Tribunal **RESUELVE:**

**I.- DECLARAR ERRÓNEAMENTE concedidos** los recursos de apelación interpuestos por las defensas de Rodolfo Daniel González, Adriana Cecilia Crucitta, Ezequiel Gustavo Bovetti, José Carlos [REDACTED] Gabriela Saint Pierre, Ernesto Rubel y Rita Soledad Machuca, respecto del dictado de la prisión preventiva.





## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL N° 3

Causa **FSM 18007/2024/57/CA13**, "Legajo N° 57 -  
SOLICITANTE: [REDACTED] SA IMPUTADO:  
[REDACTED] JOSE CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE  
APELACION", del Juzgado Federal en lo Criminal y  
Correccional de San Isidro N° 1, Secretaría N° 1.  
Registro de Cámara: 11.523

**II.- CONFIRMAR los puntos dispositivos I, II, III, IV, V, VI, VII, XIII y XIV** del pronunciamiento recurrido, en cuanto decretan los procesamientos de **José Carlos [REDACTED] Ernesto Javier Rubel, Rodolfo Daniel González, Adriana Cecilia Crucitta y Gabriela Patricia Saint Pierre**, y fijan los embargos de todos ellos, a excepción del dispuesto respecto de Crucitta.

**III.- MODIFICAR EL MONTO DEL EMBARGO** impuesto a **Adriana Cecilia Crucitta**, estableciéndolo en la suma de mil millones de pesos (\$ 1.000.000.000).

**IV.- CONFIRMAR los puntos dispositivos XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI**, en cuanto decretan los procesamientos y embargos de las personas jurídicas "[REDACTED] SA", "Felsir Biotecnología SRL", "Vijusa Industrial Argentina SA", "Nopor Service SA" y "Vía SNP Logística SA".

**V.- REVOCAR el punto dispositivo IX** del auto apelado y, en consecuencia, **DISPONER LA FALTA DE MÉRITO para procesar o sobreseer** respecto de **Ezequiel Gustavo Bovetti**, **ORDENANDO SU INMEDIATA LIBERTAD**; la que deberá instrumentarse y cumplirse en la instancia de origen, de no mediar impedimento emanado de autoridad competente (Art. 309 del CPPN).

**VI.- REVOCAR el punto dispositivo XI** del auto apelado y, en consecuencia, **DISPONER LA FALTA DE MÉRITO para procesar o sobreseer** respecto de **Rita Soledad Machuca**, **ORDENANDO SU INMEDIATA LIBERTAD**; la que deberá instrumentarse y cumplirse en la instancia de origen, de no



mediar impedimento emanado de autoridad competente (Art. 309 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, hágase saber a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la CSJN (Acordada 10/25 y ley 26.856) y devuélvase.

MARCOS MORAN

MARCELO DARÍO FERNÁNDEZ

JUAN PABLO SALAS

DARIO EMMANUEL FIGUEIRAS

SECRETARIO DE CÁMARA

